

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN

Juzgado del Trabajo I C.J.C.

ACTUACIONES N°: 284/13



H2090168930

JUICIO: SORIA ANTONIO OMAR Y OTROS C/ SILNA S.R.L. Y OTRO S/
INDEMNIZACION POR DESPIDO. EXPTE 284/13.-

CONCEPCION, Mayo 18 de 2017.-

AUTOS Y VISTOS: Los presentes autos caratulados: "SORIA ANTONIO OMAR Y OTROS Vs. SILNA S.R.L. Y OTROS s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO" que se tramitaron por ante el Juzgado de Conciliación y Trámite de la la. Nominación de éste Centro Judicial, del que

R E S U L T A

I. Que a fs. 36/41 se presenta el letrado Tomás R. Vicente Alba en nombre y representación de los Sres. Antonio Omar Soria, Angel Isidro Soria; Mauricio Ezequiel Amaya y Diego Rubén Díaz, conforme lo acredita con copia de poderes ad litem que acompaña (fs. 2/5). En tal carácter interpone demanda por cobro de pesos en contra de la razón social Silna S.R.L., con domicilio en Pasaje Los Álamos N° 2604 de la ciudad de Concepción y razón social Azucarera Juan Manuel Terán S.A., con domicilio en Ingenio Santa Bárbara, localidad del mismo nombre, jurisdicción de la ciudad de Aguilares, reclamando la suma de \$ por los conceptos que se establecen en esta demanda, con más sus intereses, gastos y costas, o bien lo que en más o en menos se determine conforme a las probanzas de la causa.

Al exponer sobre los hechos relata que:

Que los actores, desde la fecha de ingreso y hasta el momento del distracto se desempeñaron como estibadores de bolsas de azúcar con prestación de servicios en los distintos galpones de azúcar existentes tanto dentro de la planta fabril del Ingenio Santa Bárbara como en los que su titular la razón social Azucarera Juan Manuel Terán S.A. tiene en calidad de propietaria y/o arrendataria fuera de la planta industrial pero dentro del radio de la ciudad de Aguilares. Que el ingreso a dicho puesto de trabajo tuvo lugar luego de haber sido sub contratados por la razón social Silna S.R.L., empresa encargada de proveer personal de carga y estiba de bolsas de azúcar para la razón social Azucarera Juan Manuel Terán S.A., quien en definitiva era la verdadera y única beneficiaria de los servicios que prestaban los actores, en tanto y en cuanto dicha firma es la propietaria exclusiva de los azúcares en cuya carga, descarga y estiba trabajaban aquéllos. Que los trabajadores cumplían tareas correspondientes a la actividad normal y específica, propia de la firma Azucarera Juan Manuel S.A. como lo es la estiba y la carga de los azúcares que ésta última produce en su planta industrial sita en la localidad de Santa Bárbara.

Que percibían sus haberes en forma quincenal, siendo remunerados por bolsa cargada, descargada o estibada. Que la accionada no cumplía con el deber de abonar el adicional por doble movimiento previsto en el Convenio Colectivo de la actividad 12/88, pese a los reiterados reclamos de los actores. Que no hubo capacitación durante la relación laboral. Que egresaron de su puesto de trabajo en fecha 28/06/2013 por despido indirecto, el cual es fundamentado por los actores manifestando que dieron cumplimiento en todo momento con todos sus deberes

contractuales en el marco de la relación laboral que los unió con la subcontratista Silna S.R.L.. Que por esta razón, llama la atención cuando en fecha 10 de Junio de 2013, al presentarse los actores en la portería del Ingenio Santa Bárbara, en horario de ingreso a fin de prestar su débito laboral, fueron interceptados por el personal de la citada fábrica, quienes manifestando órdenes de la subcontratista le impidieron tomar parte de sus labores habituales. Que o y en la misma fecha (10/06/2013), los actores procedieron a remitir a la demandada telegrama ley 23.789 reclamando la registración de la verdadera remuneración percibida en los libros y registros de ley, ya que sólo se les registraba el 60% de la remuneración, siendo el 40% de la misma abonada en negro, intimando además por el plazo de 48 horas para que proceda a abonar vacaciones año 2012 y las diferencias de haberes por falta de pago por presentismo, escalafón por antigüedad, adicional por estiba en altura (estiba 80 capas) y la remuneración especial por doble movimiento en la descarga, carga y estiba de bolsas de azúcar, desde los dos años inmediatos anteriores al día de la fecha hasta la actualidad, bajo apercibimiento caso silencio, negativa y otra actitud esquiva de su parte considerarse despedidos. Que por último –ante la negativa del ingreso a tomar parte de sus labores habituales-, intiman plazo 48 horas (conf. art. 57 LCT) procedan a aclarar sus situaciones laborales, procediendo a otorgarles efectiva ocupación, todo ello bajo apercibimiento de considerarse injuriado y despedido por culpa de la empleadora.

Que al momento que los actores estaban despachando sus telegramas, en el Correo Oficial de la República Argentina Oficina de Aguilares les comunican a los Sres. Mauricio Amaya, Diego Díaz e Isidro Soria que existía una carta documento remitida por la accionada, fechada en 10/06/2013 la cual decía: “Siendo que no se presenta a trabajar desde el día 06/06/13 incluido, le intimo por este acto y por el término de 24 horas de recibida a presentarse a trabajar caso contrario queda configurado el abandono de trabajo por parte de Usted. Queda Ud. notificado”.

Que al día siguiente, al presentarse los actores en el lugar de trabajo y en horario habitual –dando pleno cumplimiento con lo solicitado en la carta documento remitida por la empleadora-, nuevamente y por órdenes de la subcontratista, no se les permite otra vez el ingreso. Que los actores requirieron la actuación de la Secretaría de Estado de Trabajo Delegación Concepción, de resultas de lo cuál y siendo horas 8.30 del mismo día, se constituye un inspector de dicho organismo el Sr. Roberto Villagra quien previo acercarse al portón de ingreso de dicha planta fabril acompañados de los mencionados trabajadores (dieciocho en total) constata efectivamente que la sub contratista no les permitía ingresar a trabajar. Reproduce lo manifestado en Acta realizada por personal autorizado de la S.E.T. Delegación Concepción como a horas 8.30 del día 11/06/2013, el que doy por reproducido y será analizado infra.

Que la accionada deja vencer el plazo consignado por los actores en el telegrama ley 23.789. Que por este motivo en fecha 28/06/2013 los mismos remiten otro telegrama a su empleadora, comunicándoles que se consideraban despedidos en los siguientes términos: “No habiendo contestado el Telegrama Ley 23.789 que les remitiera a Ud. en fecha 10/06/2013 (recibido por Ud. en fecha 12/06/2013) a fin de que me aclare mi puesto de trabajo, hecho éste posteriormente acreditado mediante actuación de funcionarios competentes de la Secretaría de Estado de Trabajo Delegación Concepción, habiendo además transcurrido con creces el plazo interpelado sin que se obtuviera respuesta favorable, situación ésta injuriosa que no puede mantenerse en el tiempo en razón de las necesidades alimentarias del suscripto y de mi grupo familiar, notifico hago apercibimiento prevenido y me considero despedido en forma indirecta y por vuestra culpa, en razón de los graves incumplimientos de los deberes contractuales a vuestro cargo (obligación de proveer

tareas habituales y permitir el ingreso al puesto de trabajo). Intimo plazo 4 (cuatro) días proceda a abonar indemnización por despido sin causa y demás rubros emergentes de la extinción de la relación laboral, bajo apercibimiento de lo establecido en el art. 2 de la Ley 25.323. Sin perjuicio de ello, intimo plazo 30 días proceda a hacer entrega del certificado de trabajo previsto en el art. 80 L.C.T. Por último, y sin perjuicio de lo expuesto, intimo plazo 30 días proceda a ingresar los aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social y cuotas gremiales adeudados a la fecha, bajo apercibimiento de lo establecido en el art. 132 bis LCT. Queda Ud. debidamente notificado.”

Que los actores Ángel Isidro Soria y Mauricio Ezequiel Amaya, recibieron cartas documento remitidas extemporáneamente por la accionada (fecha expedición 27/06/2013) en la cual se les comunicaba que quedaban despedidos con causa, aduciéndose falazmente que los mismos no se habrían presentado a trabajar luego de la intimación de fecha 10/06/2013. Por su parte, la accionada – extemporáneamente- remite carta documento notificando una sanción extrema de despido sin causa en contra del Sr. Soria Antonio Omar, aduciendo -también mendazmente- que el mismo habría impedido el ingreso a trabajar a sus compañeros y se habría manifestado en las puertas del ingenio donde presta servicio.

Que los actores Omar Antonio Soria, Isidro Soria y Mauricio Amaya mediante telegrama remitido a la demandada en fecha 15/07/2013 rechazan la sanción aplicada por extemporánea y mendaz, e intiman plazo 48 horas abonar el pago de indemnizaciones por despido sin causa bajo apercibimiento de lo establecido en el art. 2 Ley 25.323. Mientras que el actor Diego Rubén Díaz intima el pago de las indemnizaciones por despido bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 2 Ley 25.323.

Que la accionada nuevamente guarda silencio y a los actores no les queda otra opción que iniciar acciones judiciales.

Que se ha acreditado fehacientemente que a los actores no se les permitió el ingreso a trabajar los días 10 y 11 de Junio de 2013, que los mismos remitieron sendos telegramas solicitando se les aclare su situación laboral por el plazo de 48 horas y bajo apercibimiento de considerarse despedidos y por último, que la demandada dejó vencer el plazo consignado, para aplicar una sanción a todas luces ilícita e ilegítima y en forma extemporánea.

Funda el derecho, ofrece prueba documental, practica planilla de rubros indemnizatorios, realiza petitorio.

A fs. 45 la parte actora presenta documentación original.

A fs. 46, mediante decreto de fecha 22 de agosto de 2013 se ordena el traslado de la demanda.

A fs. 54/56 se apersona el letrado Ricardo Alfredo Veliz en nombre y representación de la razón social Silna S.R.L., lo acredita en mérito al instrumento de poder general para juicios que glosa a fs. 52/53, contestando la demanda y solicitando su rechazo con expresa imposición de costas a la contraria. Formula negativa ritual en forma general y particular.

Manifestando en la verdad de los hechos que los actores en cuestión obraron de mala fe y que en consecuencia de tal obrar lograron una desvinculación no querida por su parte, sin que se pudiera salvar la relación laboral que mantenía con los mismos, que existen probanzas documentales que dan certeza sobre la realidad de los acontecimientos pasados desde el mes de Junio hasta la fecha y de donde surge que su parte obró en un todo conforme a ley, practicando las notificaciones fehacientes a fin de que con ello no se lastime la relación laboral que se mantenía. Que tres de los actores los Sres. Ángel Isidro Soria, Diego Rubén Díaz y Mauricio

Ezequiel Amaya participan de idéntica situación, que quedaron despedidos de acuerdo al art. 244 de la Ley 20.744, que su situación es totalmente diferente es la que fue desarrollada por el Sr. Antonio Omar Soria, quien fue despedido por causar un gravamen real en perjuicio de la empresa.

Que en relación a los Sres. Ángel Isidro Soria, Diego Rubén Díaz y Mauricio Ezequiel Amaya, fueron trabajadores en relación de dependencia para su firma, con fecha de ingreso los tres el 01/12/12 según data en la Simplificación Registral, Constancia del Trabajador emitida por AFIP, a éstos desde su comienzo en la prestación de tareas para esta firma, que jamás se le adeudó ningún concepto retributivo por su desempeño laboral. Que en fecha 10/06/2013 se los intimó mediante carta documento N° 306289297, CD 306289235 y CD 306289147 a que se presenten a prestar tareas en el término de 24 hs., ya que desde el día 06/06/13 no lo hacían ni habían justificado la causa o motivo que originaba sus reiterados incumplimientos, que tal intimación cumplió con lo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo a fin de que la relación laboral que se mantenía con los mismos prosiga en los buenos términos que se venían desempeñando. Que los actores de referencia, sin dar contesto a lo intimado, envían los tres telegramas laborales N° CD 306289439, CD 306289368 y CD 306291021, intimando una serie de pretensiones totalmente infundadas y sin lógica. Que su parte habiendo solicitado el reingreso a trabajar, los intimados no cumplen con su obligación de retomar las tareas y así es que, el día 27 de junio de 2013, 17 días después de haberse intimado fehacientemente y sin que se haya cumplido con lo mismo esta parte decide en cumplimiento de lo establecido en el art. 244 de la L.C.T. prescindir de sus servicios.

Que en fecha 28 de Junio de 2013, los Sres. Ángel Isidro Soria, Diego Rubén Díaz y Mauricio Ezequiel Amaya se dan por despedidos y pretenden cobro de indemnizaciones de ley que la parte demandada considera no le corresponden bajo ningún concepto. Que los trabajadores, sin ningún fundamento lógico ni real y con especulaciones claras de lograr desvirtuar una normal relación de trabajo, intentan percibir sumas dinerarias que lo les corresponden.

Que con respecto al Sr. Antonio Omar Soria, en fecha 06/06/2013, al momento de presentarse a trabajar manifestó ante los encargados de la empresa Silna S.R.L., que si a él no le aumentaban el sueldo dejaría de trabajar, en respuesta a su comentario el personal encargado le puso en conocimiento al Sr. Antonio Soria, que las paritarias que mantiene el sector sindical y empresarial referente al rubro, que todavía se encontraban en negociaciones y que una vez culminada las mismas, se estimaba se produciría el aumento salarial y éste sería como lo fue siempre de manera retroactiva a los meses que la mesa paritaria decidiera. Que el Sr. Soria se retiró sin emitir comentario alguno a lo que se le había comunicado. Que el día 07 de Junio de 2013 en el horario de ingreso al lugar de trabajo, fue Antonio Omar Soria quien impidió, a un gran número de trabajadores, que debían de prestar servicios para la empresa, el ingreso a desarrollar sus tareas habituales y ordinarias, produciendo con esta actitud un perjuicio en el desenvolvimiento normal y habitual para Silna S.R.L., y mas aún poniendo en riesgo con dicha actitud la continuidad de la contratación de la empresa para el desarrollo de la actividad que la mantiene, sabiendo el Sr. Soria que del desarrollo de la actividad a la que el pertenecía y a la producción de la misma dependen todas las familias de trabajadores que pertenecen a Silna S.R.L., que por tal motivo y considerando una grave conducta el impedir de manera amenazante a los compañeros el ingreso para brindar la fuerza laboral de los trabajadores, mas el perjuicio producido en la prestación de servicio, tanto económicamente como en la seriedad de la empresa, es que su parte decide romper la vinculación laboral que los unía.

Impugna planilla, solicita plazo para agregar documentación, pone a disposición documentación laboral y contable indicando el lugar en que se encuentra, realiza petitorio.

A fs. 64/70 se apersona el letrado Hugo Mariano Danesi, en nombre y representación de Azucarera Juan M. Terán S.A., lo que acredita en mérito al instrumento de poder general para juicios que glosa a fs. 61/63, contesta la demandada, solicitando su completo rechazo.

Realiza negativa general y particular de los hechos narrados en la demanda. Al relatar la verdad de los hechos manifiesta:

Que los actores nunca fueron dependientes de Azucarera Juan M. Terán S.A.

Que los accionantes desempeñaron sus tareas bajo las órdenes de la razón social Silna S.R.L., única empleadora de los mismos en autos.

Que los accionantes mienten al manifestar que proporcionaban trabajo a su conferente, por cuanto el vínculo de dependencia laboral al que aluden no se produjo en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia, ya sea por trabajos permanentes o temporarios.

Que del análisis de la documentación acompañada puede advertirse que los recibos de haberes de los accionantes fueron emitidos por Silna S.R.L., lo que pone en evidencia el vínculo laboral de dependencia entre los mismos y la codemandada.

Que los Sres. Antonio Soria, Ángel Soria, Mauricio Amaya y Diego Díaz no mantuvieron ninguna relación laboral con su mandante, que son absolutamente falsas las imputaciones que pretenden ser endilgadas a su parte en el escrito de demanda.

Que Azucarera Juan M. Terán, no tiene obligaciones de ningún tipo para con los accionantes, ni debe responder a las pretensiones de los mismos que se basan en una supuesta solidaridad que es improcedente en el caso. Que no existió contrato de trabajo entre los actores y su mandante, en consecuencia, los accionantes no tienen derecho a ser indemnizados por su representada.

Afirma que la aplicación del art. 30 de la L.C.T., contrariamente a lo pretendido por la actora, resulta absolutamente improcedente.

Que el hecho de que los Sres. Antonio Soria, Ángel Soria, Mauricio Amaya y Diego Díaz hayan trabajado como cargadores del azúcar que produce su mandante, no puede llevar a la conclusión que dicha tarea corresponda a la actividad normal y específica de su mandante, por lo cual afirma la improcedencia de encuadrar el presente caso dentro de las disposiciones del art. 30 de la L.C.T., siendo en su consecuencia, errónea toda extensión de responsabilidad hacia su mandante a través de dicha norma.

Que el trabajo de estiba que los actores realizaban como dependientes de Silna S.R.L., escapa a actividad normal y específica de producción de azúcar, a la cual está dedicada Azucarera M. Terán S.A..

Que además de desempeñar los actores una actividad que escapa a la producción de azúcar a la cual está exclusivamente avocada su conferente, aquellos nunca tuvieron relación alguna con ella.

Que no existe relación laboral entre los actores y su mandante, que tampoco la actividad que realizaban los mismos para su empleadora guardaba relación con la actividad normal y habitual de su conferente por lo que no existe derecho de indemnización alguna a favor de los actores por parte de su representada, ni esta debe ser responsabilizada por el despido sufrido por los mismos en el marco de la relación laboral que mantenían con Silna S.R.L..

Plantea inconstitucionalidad del art. 73 C.P.L.. Formula reserva del caso federal, ofrece prueba documental, realiza petitorio solicitando se haga lugar a las defensas esgrimidas, rechazando la demanda, con expresa imposición de costas a la parte

contraria.

A fs. 113, mediante decreto de fecha 04/12/13 se ordena la apertura de la causa a pruebas, lo cual notificado a fs. 114/116.

A fs. 123 se apersona el letrado Carlos Cruzado Sánchez como apoderado del actor Diego Rubén Díaz, lo que acredita conforme poder Ad litem que adjunta (fs. 119), constituyendo nuevo domicilio procesal. Se le otorga intervención de ley mediante proveído de fecha 28/03/14 de marzo de 2014 (fs. 124).

A fs. 136/143 el letrado Hugo Mariano Danesi, apoderado de la co-demandada Azucarera Juan M. Terán S.A., deduce inconstitucionalidad del art. 73 de la ley 6.204, modificado por la ley 7.293.

A fs. 144 se glosa sentencia de fecha 06/05/2014, la cual resuelve hacer lugar al planteo de la demandada, declarando la inconstitucionalidad del art. 73 primera parte de la ley 6204.

A fs. 148 corre agregada acta de audiencia de conciliación la que fracasa por falta de acuerdo de los litigantes.

A fs. 339 informa secretaría sobre las pruebas producidas habiendo alegado sobre su mérito la parte accionante a fs. 352/359, fs. 361/364, haciéndolo la parte demandada a fs. 366/369 y la parte codemandada a fs. 371/373.

A fs. 373, mediante proveído de fecha 07/08/15, se ordena elevar los autos a la Excma. Cámara del Fuero, a los fines del dictado de la sentencia definitiva, siendo recepcionado en fecha 07 de septiembre de 2015 (fs. 374)

A fs. 375, por decreto del 10/09/15 queda integrado el tribunal.

A fs. 380, por providencia del 16/10/15 se dispone convocar al Contador Oficial a audiencia ante el vocal preopinante para que brinde explicaciones técnicas sobre la planilla provisoria de fs. 39/41, lo cual se lleva a cabo a fs. 385/386, omitiendo las partes alegar sobre el informe evacuado a fs. 386 conforme da cuenta la providencia de fecha 22/02/16.

A fs. 402, por providencia de fecha 13/05/16 se dispone oficiar al juzgado de origen a fin de que remitan sobre de absolución de posiciones presentado en CPAnº 6.

A fs. 412, mediante decreto del 27/09/16 se dispone oficiar al juzgado de origen a fin de que remitan expte. Administrativo nº 4527182/OI/2013.

Cumplidos los trámites previos ordenado, quedan los autos con la firmeza del decreto de fecha 23-02-17 (fs. 418) en estado de dictar sentencia definitiva de única instancia, y

C O N S I D E R A N D O

Voto del Sr. Vocal preopinante Enzo Ricardo Espasa

Cuestión Preliminar

I- Conforme a los términos de la demanda y su responde constituyen hechos admitidos y por ende exentos de prueba: 1) la existencia de la relación jurídica de subordinación que vinculó a los actores Antonio Omar Soria, Angel Isidro Soria, Mauricio Exequiel Amaya y Diego Rubén Diaz con la demandada Silna S.R.L.; 2) las tareas desempeñadas como estibadores de bolsa de azúcar; 3) el carácter de contratista de servicios que revistió la firma Silna S.R.L. con respecto a la codemandada Azucarera Juan M. Terán S.A.; 4) la autenticidad y recepción del intercambio epistolar mantenido por los actores y la demanda Silna S.R.L., al igual que la autenticidad de los recibos de liquidación de haberes y actuaciones administrativas sustanciadas en Expte. Nº 452/182-OI/2013.

Asimismo la demandada niega en general los hechos narrados en el libelo inicial, omite dar su versión sobre la fecha de ingreso del actor Antonio Omar Soria.

Igualmente, y respecto de todos los accionantes omite hacer referencia a la jornada de trabajo cumplida, remuneración percibida, naturaleza del vínculo laboral y forma

de liquidación de los haberes, por lo cual, en mérito a lo normado por el art. 60 (tercer párrafo) de la ley 6.204, corresponde tenerla por conforme con lo invocado al respecto en la demanda.

II- Los hechos controvertidos y de justificación necesaria sobre los cuales este Tribunal deberá pronunciarse son:

1) Fecha de ingreso de los actores Angel Isidro Soria, Diego Rubén Díaz y Mauricio Exequiel Amaya.

2) Extinción del contrato de trabajo: su justificación.

3) Responsabilidad solidaria de Azucarera Juan M. Terán S.A.

4) Rubros y montos reclamados.

Costas y honorarios.

A continuación se tratará cada una de ellas por separado (art. 265 inc.5 CPCC., supletorio).

II. Primera cuestión

1- Controvierten las partes, acerca de la fecha de ingreso de los actores Angel Isidro Soria, Diego Rubén Díaz y Mauricio Exequiel Amaya.

La parte accionante en su escrito de demanda (fs. 36/41) consigna como fecha de ingreso del actor Angel Isidro Soria el 26/07/2011, del actor Mauricio Exequiel Amaya el 13/07/2012 y del actor Diego Rubén Díaz el 01/07/2007. Por el contrario la demandada Silna S.R.L. sostiene en su responde, sin distinción alguna, que los mencionados fueron trabajadores en relación de dependencia de la firma desde el 01/12/12.

2.- Así planteada la traba de la litis, cabe merituar las pruebas aportadas y producidas, pertinentes y conducentes (arts. 40, 300, 302 y 265 inc. 4) del C.P.C.y C. supletorio), que a continuación se señalan:

a)- La prueba informativa rendida a fs. 170/184 y fs. 194/216 por el Correo Oficial, carece de efecto probatorio de la fechas de ingreso que se denuncian al demandar.

b) Las constancias emanadas del expte. administrativo nº 452/182-OI/2013 sustanciado ante la Secretaria de Estado de Trabajo, Delegación Concepción, resultan inconducentes y ningún elemento aportan en relación al tópico en examen, máxime aun si se toma en cuenta que en oportunidad de la audiencia de fs. 07 se reconoce como fecha de ingreso el año 1998, tal como surge de recibos de sueldo acompañados a la causa.

c) La prueba instrumental consistente en misivas cursadas por las partes, recibos de sueldo, formularios Multinota AFIP F 206/M carecen de efecto probatorio de la fecha de ingreso.

d) La prueba de exhibición de documentación laboral y contable, rendida por la accionada Silna S.R.L. a fs. 674/680 tal como da cuenta el cargo de recepción del juzgado de fecha 11/06/14, si bien impide la aplicación al caso de la presunción establecida por el art. 61 C.P.L., de ninguna manera enerva la eventual demostración por parte de los actores de su deficiente registración de sus fechas de ingreso. Ello así por cuanto dichos libros, son llevados en forma unilateral por el empleador y sin intervención del dependiente, por lo que resultan inoponibles a este último, conforme lo tiene dicho nuestro Máximo Tribunal (CSJT, "Smael Hugo Sale vs. Suc. Salazar Pedro Camilo s/ indemnización", sentencia nº 125 del 14/03/03).

e) La confesión ficta (art. 331 del C.P.C.y C.) que deriva del incomparendo del presidente del directorio de Azucarera Juan Manuel Terán S.A. – codemandada en autos- a la audiencia de absolución de posiciones conforme constancias de fs. 320/326, lo que motiva la apertura del sobre pertinente (fs.) en nada perjudica a las conclusiones que anteceden. Al respecto cabe tener presente que este instituto, el de la "Confesión Ficta" no constituye una prueba de carácter absoluto, por lo que debe ser apreciada en función de todos los elementos de juicio obrantes en la

causa, porque de lo contrario, se haría prevalecer la ficción sobre la realidad y la decisión podría alejarse de la verdad objetiva. En tal sentido se ha dicho que "Para que la confesión ficta, pueda ser valorada por el juez, debe estar ratificada o corroborada por otros elementos de prueba. (Ctrib. de San Francisco, sala unipersonal, 15-11-2001, "Acosta Juan A. c/ Racca Cristian F. y otro", L.L.C. 2002-1241). En idéntico sentido "El valor probatorio de la confesión ficta no es absoluto, y a los requisitos formales que se vinculan con la citación e incomparecencia deben agregarse la existencia de elementos corroborantes cuando ha mediado una negativa expresa al contestar la demanda" (Revista La Ley 126-163).

f) La prueba de reconocimiento producida a fs. 271 ningún elemento de juicio aporta al debate, menos avala la afirmación de los actores de un ingreso anterior al registrado por la demandada.

3- Con estos escasos elementos probatorios, no puede tenerse por acreditado que los actores Angel Isidro Soria, Mauricio Exequiel Amaya, Diego Rubén Díaz hayan ingresado a trabajar en la fecha que pretenden. Resulta necesario poner de relieve que correspondía a los accionantes la demostración del asidero de su reclamo, lo cual no ocurrió de conformidad a las reglas que rigen el "onus probandi", carga fundamental y trascendental en el proceso laboral, no siendo en el caso aplicable la inversión de la carga probatoria; deviniendo ajustado señalar que era a los actores a quienes le correspondía probar los presupuestos de hechos alegados en sustento de su pretendido derecho.

En este sentido se ha sostenido que: "...Cada parte carga con la obligación de probar los extremos en que funda su pretensión y quien alega una circunstancia eximente de responsabilidad tiene impuesto por imperativo legal la obligación de demostrar los asertos en que funda su tesitura..." (conf. Cam.Nac. Trab., Sala II, dic. 13-1994-"Marín, Blas B. c. Vinisa S.A. y otro, en D.T.1995-a-401). "...Las partes deben aportar las pruebas de sus afirmaciones, o en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés. El actor tiene la carga de acreditar los hechos constitutivos del derecho que invoca y el demandado, los extintivos, impeditivos o modificativos que opone a aquella..." (CSJ. Bs.As.Ac.L. 33.662 del 18/09/84), Citado en: Teoría y Técnica Probatoria en el Proceso Laboral- Alejandro Oscar Babio, Págs. 64,65,82, Editorial Platense, edic. 1998).

Podemos entonces concluir que, como principio rector en materia de carga de la prueba, que aquella parte cuya pretensión procesal depende, para poder tener éxito, de la aplicación de determinada norma jurídica, soporta la carga de la prueba de los presupuestos de hechos que tornan aplicable el precepto jurídico que la favorece. Rige, además en nuestro procedimiento lo dispuesto en el art. 302 del CPCC aplicable por reenvío procesal del art. 14 del CPL, en cuanto incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y será el juez quien deberá ponderar la situación de cada parte en torno a la posibilidad de producir prueba y aplicar el principio de las cargas probatorias dinámicas; nada de ello aconteció en el caso que nos ocupa.

Esta conclusión reposa en parte, en la circunstancia de que los actores Angel Isidro Soria, Mauricio Exequiel Amaya y Diego Rubén Díaz, no aportaron pruebas fehacientes respecto de la fecha de ingreso que denunciaron al demandar, y por el contrario la prueba colectada al proceso presta adecuado fundamento a lo sostenido por la demandada Silna SRL con respecto a dicha cuestión, tomando en cuenta que con sus registraciones (ver hojas móviles de registro de remuneraciones) corrobora lo consignado en los recibos de sueldo.

Segunda cuestión

A -1) Sobre el distracto ocurrido en autos, en el texto de promoción de demanda se pretende que los mismos obedecieron a un despido indirecto, que se materializó por medio de telegramas colacionados laborales que los actores remitieron en fecha 28/06/13. Por el contrario, en el conteste de fs. 54/56 se sostiene que la extinción de la relación laboral se produjo, en el caso del actor Antonio Omar Soria por despido directo fundado en justa causa, mientras que en el caso de los actores Angel Isidro Soria, Mauricio Exequiel Amaya y Diego Rubén Díaz por la causal de abandono de trabajo prevista por el art. 244 de la LCT .

2) Conforme a las pruebas pertinentes y atendibles para resolver esta cuestión ha quedado acreditado:

2.1 Que en fecha 10/06/13 los actores remitieron telegramas colacionados laborales (fotocopias a fs. 6/9, originales reservados en caja fuerte de Secretaría) donde denunciaban la falta de registración del 40% de sus remuneraciones y deficiente registración de la fecha de ingreso, intimando por un plazo de 30 días en los términos de la ley 24.013 la subsanación del registro incorrecto. En la misma oportunidad, por un plazo de 48 hs. reclaman aclaración de su situación laboral denunciando negativa de ingreso a cumplir labores, pago de vacaciones año 2011, diferencias de haberes por falta de pago de presentismo, escalafón por antigüedad, adicional por estiba de altura, remuneración especial por doble movimiento en la descarga, carga y estiba de bolsas de azúcar. Todo ello bajo apercibimiento en caso de negativa o silencio considerarse despedidos.

2.2 Asimismo, también está probado que en la misma fecha (10/06/13) la demandada Silna SRL, denunciando ausencia al trabajo desde el 06/06/13, intima a los actores Mauricio Ezequiel Amaya, Diego Rubén Díaz e Isidro Angel Soria a que en un plazo de 24 horas se presenten a trabajar bajo apercibimiento de considerar configurado el abandono de trabajo. (ver cartas documentos que en fotocopias glosan a fs. 14/16, originales a la vista y reservados en caja fuerte de Secretaría).

2.3 La demandada remitió en fecha 27/06/13 carta documento (fs. 23/24) a los actores Mauricio Ezequiel Amaya, Diego Rubén Díaz e Isidro Angel Soria, donde acusándolos del incumplimiento de presentarse a trabajar en días posteriores a su intimación, daba por concluida la relación laboral bajo la causal de abandono de trabajo.

2.4 También está demostrado que el actor Antonio Omar Soria fue despedido el 27/06/13 por la demandada Silna S.R.L. con causa en haber impedido el día 07/06/13 en horas de la mañana el ingreso a trabajar a sus compañeros de trabajo, y en la circunstancia de haberse manifestado en las puertas del ingenio Azucarera Juan Manuel Terán donde prestaba servicios, motivando el disconformismo de dicha empresa y poniendo en riesgo la continuidad de la contratación con la misma (ver carta documento de fecha 27/06/13 que en fotocopia glosa a fs. 22/).

2.5. Asimismo, también está probado que los cuatro accionantes, acusando el silencio de su empleador, mediante telegramas colacionados laborales de fecha 28/06/2013 se consideraron injuriados y despedidos indirectamente.

2.6. El actor Antonio Omar Soria, en fecha 15/07/13 remitió telegrama colacionado laboral rechazando carta documento de fecha 27/06/13 por falsa y extemporánea, ratificando al mismo tiempo su comunicación de despido indirecto, intima plazo de 48 hs. el pago de indemnizaciones por despido.

2.7. La prueba informativa rendida por el Correo Oficial (fs. 215) no solo comprueba la autenticidad del contenido, sino también la recepción de los despachos postales referenciados precedentemente. En punto a la cuestión, emerge del informe evacuado que los TCL remitidos por los actores en fecha 28/06/13 fueron entregados a la demandada en el domicilio laboral en fecha 29/06/13, mientras que

las cartas documentos impuestas por la demandada en fecha 27/06/13 fueron entregadas a los actores el 02/07/13. En cuanto a los telegramas intimatorios impuestos por los actores el 10/06/13 fueron entregados el 12/06/13.

2.6. La actuación administrativa que da cuenta el expediente administrativo n° 452/182/OI/2013 remitido por Delegación Concepción de la Secretaría de Estado de Trabajo -en este acto a la vista-, acredita que el día 11/06/13 a hs. 8,30 un inspector de la SET se hizo presente en la portería de acceso al establecimiento del ingenio Santa Bárbara a los fines de constatar la negativa de tareas denunciadas por un grupo de trabajadores (entre ellos los actores en autos). El acta labrada en la oportunidad, da cuenta de lo siguiente: “En el día de la fecha siendo hs. 8,30 me constituí en el domicilio de la razón social Juan Manuel Terán ubicado en el ingenio Santa Bárbara en donde las empresas Silna SRL, Los Barrientos y Cia SRL y Claudio Alejandro Soria prestan servicios que consisten en la carga, descarga y estiba de bolsas de azúcar, cocina y cruda a los efectos de constatar las razones por las cuales el personal que más abajo se detallan y prestan servicios para las empresas subcontratistas mencionadas, no se les permitió el ingreso al establecimiento fabril con el objeto de prestar sus servicios bajo relación de dependencia, ello por cuanto los mencionados obreros me exponen que habiéndose presentado en hora de ingreso habitual se les informó que no podían entrar a trabajar por estar suspendidos. Aclaran que en el día 10/06/13 recibieron carta documento remitida por las empresas referidas en las que se los intimaba a presentarse en el día de la fecha. Que al momento de apersonarme conjuntamente con los trabajadores que más abajo se detallan a portería de ingreso al ingenio Santa Bárbara propiedad de la razón social Azucarera Juan Manuel Terán S.A. en donde soy atendido por un empleado y al exponer el motivo de mi presencia como funcionario de la S.E.T. manifestándome que vendría a atenderme el Jefe de Personal. Luego de un compás de espera no hubo respuesta ni el permiso para ingresar a los trabajadores a cumplir con sus tareas, considerando una actitud de indiferencia sobre la situación... No siendo para más a horas 10,00 se cierra el acto”.

3- Los elementos probatorios adverbados al proceso permiten a esta Vocalía concluir lo siguiente:

Considerando que la extinción ha sido dispuesta por ambas partes con causa según las expresadas en sus respectivas comunicaciones (TCLs de fecha 28/06/13 y cartas documentos de fecha 27/06/13), se plantea el interrogante de si el despido se produjo por autodespido o por abandono de trabajo en el caso de los actores Mauricio Ezequiel Amaya, Diego Rubén Díaz e Isidro Angel Soria, o bien por despido con invocación de justa causa en el caso del actor Antonio Omar Soria. Frente a ello y ante todo es del caso dejar establecido que el contrato de trabajo no se extingue dos veces, primero por despido indirecto y luego por despido directo. No hay posibilidad legal de una doble extinción de la relación laboral (Art. 243 L.C.T.), porque siendo el despido una declaración de voluntad unilateral de carácter recepticio, la suerte del contrato dependerá de la legitimidad y recepción de la comunicación del primer distracto.

De modo tal que si el despido indirecto (que en este caso, resulta acreditado fue primero en el tiempo) fue comunicado legalmente producirá sus efectos rescisorios desplazando así al despido directo, sólo si la comunicación de aquel fuera inválida habilitará al tratamiento del siguiente. Ello no obsta a la justificación o no de la causal en que se fundó el despido, o a la procedencia de las indemnizaciones derivadas de la rescisión contractual.

En punto a la cuestión, según emerge de la prueba informativa rendida por el Correo Oficial antes referida, la razón social accionada recibió en fecha 29/06/13 los

telegramas de despido indirecto cursados por los cuatro accionantes en autos; mientras que la comunicación de despido directo aquellos la recibieron el día 02/07/13, esto es cuando los contratos ya se encontraban extinguidos.

Consecuentemente, surge evidente que son los accionantes quienes ponen fin a la relación laboral en primer término, y por ende es a ellos a quienes corresponde conforme las reglas de la carga probatoria, la acreditación de los motivos invocados, para permitir al juzgador proceder de acuerdo a lo normado en el art. 242 LCT., es decir que se deben aportar elementos suficientes de prueba para ello.

Siendo ello así, el distracto realizado por la demandada Silna S.R.L., por haber entrado en la esfera de conocimiento de los actores con posterioridad resulta irrelevante siendo un imposible jurídico que una relación laboral ya extinguida pueda finalizar nuevamente. No debe perderse de vista que el despido en cuanto a sus efectos una vez notificado a la otra parte se transforma en un acto jurídico consumado, razón por la cual los emplazamientos posteriores a ese momento carecen de virtualidad sobre un vínculo laboral fenecido y por ende de ninguna manera podía configurarse una situación de abandono de trabajo que legitime la situación de despido directo dispuesto por el empleador.

De tal forma, tenemos que el cese de la relación laboral se operó en la fecha mencionada, el 29/06/13, por despido indirecto de los actores fundado en el silencio de la demandada al reclamo que aquellos habían impetrado a través de las epístolas de fechas 10/06/13.

Como vimos, la demandada recibió las referidas piezas postales el 12/06/13 y nada respondió a las mismas tempestivamente, a lo que estaba obligada ante un acto de intimación si lo consideraba inexacto. No subsana tal omisión, la circunstancia de que en simultáneo hubiera intentado configurar una situación de abandono de trabajo por parte de los actores Mauricio Ezequiel Amaya, Diego Rubén Díaz e Isidro Angel Soria, como surge de las cartas documentos de fecha 10/06/13.

De los términos que emergen de los telegramas enviados por los accionantes el 28/06/13, se colige claramente que la causa del despido indirecto es el silencio de la demandada a los cuatro requerimientos contenidos en los despachos del 10/06/13: uno es el de la subsanación de deficiencias registrales (remuneración, fecha de ingreso), otro el ingreso de aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social; otro el pago de vacaciones año 2012 y diferencias de haberes y finalmente el reclamo de dación de ocupación ante impedimento de su prestación.

Examinada la legitimidad de la decisión de los trabajadores estimo que las tres primeras causales no son de recibo. En efecto, desde que se envió la intimación a registrar (no se ha cuestionado su recepción ni insistido en sus fechas cuando esa comunicación era recepticia) hasta que se decide el despido indirecto no pasaron los treinta días que requiere el art. 11 de la LNE, por lo cual no se cumple con el recaudo esencial del artículo de mención. Por ende, la decisión de los actores por la causal de falta de subsanación de deficiencias registrales, fue prematura por no cumplir con la norma prevista.

De todas maneras, la pretensión de reconocimiento de una fecha de ingreso anterior a la admitida por la accionada tuvo resultado negativo para los accionantes conforme fue analizado y concluido en el tratamiento de la primera cuestión.

Sumado a ello, si bien la fecha de ingreso formó parte de la traba de la litis y se constituyó en una cuestión litigiosa conforme escritos constitutivos del proceso, verifico que no aconteció lo mismo con lo referido a la deficiencia registral relativa a la remuneración percibida y la falta de ingreso de aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social desde que en la demanda nada se expuso o fundamentó al respecto y tal omisión no puede considerarse subsanada con la remisión o transcripción de las intimaciones realizadas extrajudicialmente, pues ello

solo no cumple con las exigencias del art. 55 de la LPF .En tal sentido, la jurisprudencia es pacífica al considerar que “La demanda debe bastarse a sí misma (CNAT, sala IX, 27/03/2006, D.T. 2006-B-1859).

Tampoco es de recibo la causal de despido por la carencia de respuesta a la intimación del pago de las vacaciones año 2012 y de diferencias de haberes porque no solo no formaron parte de la pretensión incoada en esta litis, sino que menos aun se hubo acreditado que ese crédito y diferencias existieran tal como emerge de las probanzas incorporadas al sub-examine.

En cambio, si debo admitir como legítimo el despido por la causal de silencio del empleador ante un emplazamiento a aclarar la situación laboral frente a un arbitrario impedimento de parte de la empleadora de permitirle a los actores continuar con sus tareas habituales sin que medie causa o motivo que lo justifique, realizado para ser contestado en el término de dos días hábiles.

En efecto, de las constancias de autos surge no sola la intimación de la demandada a que los actores se reintegren a sus tareas (ver cartas documentos del 10/06/13), sino también en simultáneo la denuncia de aquellos acerca de la falta de otorgamiento de tales tareas y el reclamo de aclaración de la relación laboral en tal sentido.

Sin perjuicio de ello, y anoticiados aquellos de la intimación fehaciente de la demandada para que en un plazo de 24 hs. se presentaran a trabajar, los actores se presentaron dentro del plazo fijado sin que se les hubiera permitido el acceso al establecimiento a fin de cumplir efectivamente con el emplazamiento formulado por la empresa. La prueba contundente de ello lo constituye la actuación llevada a cabo el día 11/06/13 por un funcionario público ((fotocopia a fs. 120/121, original a la vista y en caja fuerte, certificación por el autorizante a fs. 337/340), de la que surge comprobada la versión que los actores brindaron acerca del impedimento de ingreso al ingenio a fin de poder cumplir con su débito laboral. Repárese que el inspector de la S.E.T. actuante dio inició al acto de constatación a las 8,30 hs. y lo culminó a hs. 10,00, es decir que estuvo en el portón de ingreso del ingenio aproximadamente una hora y media esperando respuesta a su requerimiento de aclaración de la situación laboral de los trabajadores, y en ese lapso mas que prudencial, no recibió ningún tipo de respuesta y menos aun se permitió el acceso de los trabajadores al lugar como lo certifica.

Ponderada dicha actuación ofrecida como prueba por los accionantes, debe señalarse en primer lugar que constituye un instrumento público que como tal goza de plena fe, en particular con relación a los hechos que se dicen cumplidos por el funcionario público o en su presencia. Precisamente, frente a ellos, el instrumento hace plena fe hasta que sea arguido de falso por acción civil o criminal (CSJT.

“Aybar Oscar Eusebio Vs. Grafa S.A. S/ Cobro de Australes”, sentencia del 29-07-94; “Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas “Islas Malvinas” Vs. Consorcio General Lamadrid s/ Reivindicación”, sentencia del 29-11-01), lo que no verifico cumplido en el sub-lite.

Por tanto de la actuación llevada a cabo por un oficial público surge demostrado no solo que los actores se presentaron a requerir tareas en el plazo que había fijado la demandada en sus cartas documentos del 10/06/13, esto es 24 hs. después, sino más importante aun que no se les permitió el ingreso a prestar servicios en su lugar habitual de trabajo, pese a la intimación que se les había formulado en tal sentido. Consecuentemente, cabe concluir que los accionantes tenían un motivo más que justificado para considerarse injuriados y colocarse en situación de despido por exclusiva culpa de la patronal.

Para la configuración de la injuria como acto de incumplimiento, refiere Raúl Ojeda que es menester la existencia de elementos objetivos y subjetivos(ver Ley de

Contrato de Trabajo comentada y concordada, Vázquez Vialard (dir.), Ojeda (coord.), Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2005, T. III, p, 343). El elemento objetivo en este caso es la inobservancia por la demandada del deber de dar ocupación, art. 78 , LCT.

En cuanto a los elementos subjetivos de la injuria, uno de ellos es la imputabilidad, esto que puede atribuírsele a una conducta reprochable de la empleadora sin justificativo. No interesa que haya o no intención de dañar, pero existiendo la injuria, esa consecuencia perjudicial para el trabajador al retacearle los derechos al negarle ocupación, se produce sin ambages.

El siguiente elemento subjetivo cual es el agravio, siguiendo a Ojeda, ob.cit., estimo que en la especie aparece prístino. El sentimiento de quien padece el incumplimiento se expresa en el intercambio epistolar.

El daño a los componentes materiales o inmateriales que conforman la relación contractual se ha producido. Entrando concretamente a su valoración prudente, como lo manda el art. 242 LCT, se impone tal conclusión. La reacción del injuriado tiene causalidad probada y es proporcional como para justificar la afectación del principio de la continuidad. No consiente la continuidad de la relación laboral ni a título provisorio. Pasaron más de quince días de la intimación y no hubo atisbos de respuesta y menos positiva. Por el contrario la demanda pretendió disfrazar la situación aludiendo un supuesto abandono de trabajo lo que en el caso ningún asidero podría haber tenido por cuanto falta el elemento subjetivo del abandono de trabajo o sea la voluntad injustificada de los dependientes a reintegrarse al trabajo.

Cabe aclarar que para que se configure la cesantía por abandono de trabajo en los términos del art. 244 de la LCT es necesario, además de la previa intimación al trabajador, que quede evidenciado su propósito expreso o presunto pero inequívoco, de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de servicios, sin que medie justificación alguna, y la nota que lo caracteriza es –en principio y generalmente–, el silencio del dependiente. En la presente, esto no se evidencia dado que del intercambio telegráfico reseñado y de la prueba rendida surge que los actores se presentaron a cumplir con el emplazamiento, lo que evidencia la intención de mantener el contrato de trabajo que unía a las partes.

En definitiva, lo que verifico es que la omisión de dar ocupación por parte de la demandada sin fundamento persistió. Todas las expresiones de la demandada en el responde respecto de las supuestas inconductas laborales del actor Antonio Omar Soria no pueden considerarse por ser ajenas al acto de despido, según el art. 243 LCT.

En suma, la sola configuración del silencio del empleador en los términos del art. 57 de la LCT genera exclusivamente una presunción de incumplimiento contractual en su contra y tanto más cuando en el presente caso se comprueba la falta de otorgamiento de tareas denunciada por los actores.

No paso por alto que la demandada Silna S.R.L. en el responde no negó puntualmente la recepción de la intimación y posterior comunicación de distracto cursadas por el actor, como tampoco cuestionó la prueba informativa rendida por el Correo Oficial en esta litis. Ello así, no hace más que reforzar la conclusión de tener no solo por válidas sino también por recepcionadas las comunicaciones postales remitidas por los actores, pues, es de toda evidencia que las interpelaciones llegaron a destino, entraron en la órbita de conocimiento del demandado y por ende, cumplieron su finalidad.

La jurisprudencia en forma coincidente señala en casos similares al aquí debatido que “Si la intimación cursada por el trabajador a su principal contiene una clara manifestación de voluntad de rescindir el vínculo laboral sin nueva notificación sujeta al silencio del patrón en el lapso de 48 horas, la falta de respuesta de éste determina

que cobre operatividad el autodespido del dependiente”.

Si bien el silencio no constituye manifestación de voluntad, cuando media incertidumbre vale como tal, en la medida que el empleador fue reticente con su deber de expresarse en determinado sentido.

Desde esta perspectiva, el silencio del demandado, configurado por la falta de contestación oportuna a la intimación cursada por los actores en fecha 10/06/13, generó en el caso la presunción iuris tantum a favor de éstos últimos sobre la existencia de incumplimientos de deberes contractuales del empleador, tal como lo es el de brindar ocupación efectiva.

En suma estando acreditada la intimación de los trabajadores en los términos señalados y el silencio del empleador dentro del plazo en que fuera intimado sin responder a los puntuales requerimientos de sus dependientes, sin duda impidió la prosecución de la relación laboral, y ello es equiparable a una negativa a seguir otorgando trabajo, violentando de tal forma el deber de actuar de buena fe, habida cuenta que tal actitud configura injuria de gravedad tal que justifica el desplazamiento del principio de conservación del contrato de trabajo (Art. 10 LCT) haciendo que el dependiente se considere despedido por exclusiva culpa de su empleador.

Por lo considerado y pruebas merituadas estimo que al haberse acreditado la existencia de la causal y motivo suficiente (detallado en el despido indirecto que los actores comunican a través de los telegrama colacionado laboral de fecha 28/06/13), resulta procedente el reclamo de los rubros indemnizatorios. Así lo declaro

Tercera cuestión

Responsabilidad Solidaria de Azucarera Juan Manuel Terán S.A.

En lo que interesa al análisis de la cuestión planteada, diré que pretende la parte accionante la extensión de responsabilidad solidaria, a la codemandada Azucarera Juan Manuel Terán S.A. por los créditos que eventualmente se declaren procedentes en el sub-lite, argumentando que los trabajadores cumplían tareas correspondientes a la actividad normal y específica, propia de la codemandada, como lo es la estiba y la carga de los azúcares que ésta última produce en su planta industrial sita en la localidad de Santa Bárbara.

La codemandada Azucarera Juan M. Terán S.A. resiste la acción promovida en su contra, argumentado que los actores no mantuvieron ninguna relación laboral con su madnante, que el hecho de que los actores hayan trabajado como cargadores del azúcar que produce no puede llevar a la conclusión que dicha tarea corresponde a la actividad normal y específica de su mandate. Que la prestación de servicios de SIlna S.R.L. en Azucarera Terán no guarda relación con la actividad normal y habitual de la misma.

Sabemos que el art. 30 LCT regla la responsabilidad solidaria de quien ceda el establecimiento o contrato o subcontrate trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia de la empresa, por las obligaciones contraídas con los trabajadores y la seguridad social.

Para que la solidaridad instituida por dicha norma sea operativa es necesario acreditar : a) la existencia de un contrato de trabajo que haga aplicable a Ley 20.744 y su régimen; b) el incumplimiento de alguno de los requisitos señalados del artículo 30 LCT, o sea no exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo o los organismos de seguridad social; c) no haber reclamado la entrega de los datos y constancias ponderadas en el párrafo 2° el artículo 30 LCT; d) tratarse de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito (primer párrafo del artículo 30 actual). La exigencia del adecuado

cumplimiento de las normas que impone el Art. 30 LCT es una obligación de resultado y no de medio, por lo que el principal se encuentra compelido a ejercer activa y personalmente el control sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social de su contratistas.

Tomando en consideración la naturaleza de la cuestión sometida a tratamiento de este Tribunal y la postura de la codemandada S.A. Azucarera Argentina, que abiertamente rechaza la posibilidad de considerar al trabajo de estiba como parte integrante de su actividad normal y específica que es la producción de azúcar, considero que el eje central del asunto radica en dilucidar qué se entiende por "actividad normal y específica propia del establecimiento".

Para Fernández Madrid, la actividad normal y específica es la que haga posible el cumplimiento de la finalidad de la empresa y que puede ser relativa tanto al núcleo del giro empresario (por ejemplo fabricación de cubiertas en una fábrica de cubiertas), como a los trabajos que coadyuvan al cumplimiento del objetivo correspondiente, pues la empresa es un todo y no puede ser fraccionada en partes a efectos de establecer la posible existencia de responsabilidad solidaria. (Conf. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, t. II, pág. 1041, LL, Bs. As 2007).

Justo López, señala que la solidaridad también se hace extensiva a esas actividades accesorias con tal de que estén integradas permanentemente al establecimiento, y agrega que quedaría afuera, lo extraordinario, en el sentido excepcional y lo eventual.

Comentando, justamente a Justo López, Fernández Madrid, aclara que ese es el motivo por el cual se ha considerado que se trata de las actividades requeridas por la norma, las desarrolladas por las concesionarias de comedores o buffet, y el club donde éste funciona, por el supermercado y la empresa de vigilancia; por la empresa de telefonía y el cableado necesario para su funcionamiento; el servicio de hotelería y el de salud de un sanatorio; el expendio de combustible y los servicios del ACA; el servicio de coche comedor y el brindado por ferrocarriles; los servicios gastronómicos y las exposiciones rurales, etc..

Por su parte Grisolía, sigue en el tema a Hierrezuelo y Nuñez y señala que los términos "específica y propia" que utiliza la ley para calificar la actividad contratada, aluden sólo a los servicios o trabajos permanentemente integrados o inseparables relacionados con la actividad que se desarrolla en el establecimiento (sea dentro o fuera de su ámbito) (Grisolía, Julio A. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, T I, pág. 370, Lexis Nexis, Bs As. 2006).

A su vez Maza, comparte la postura amplia y estima que el vocablo "específica", usado por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, no da pie a excluir aquellas actividades que, siendo normales, confluyen en forma secundaria o indirecta para lograr el objeto de la empresa. (Maza, Miguel, Casos de solidaridad por contratación o subcontratación en el artículo 30 de la LCT, D.T. t VIII, págs. 913/25).

Vázquez Vialard, ha señalado que en cuanto al elemento que establece la ley como "específica", debe distinguirse, en el proceso de elaboración de un bien o servicio, aquello que es principal de lo que no lo es. Al efecto, no sólo corresponderán, dice, a la primera calificación aquellas labores que atañen directamente al cumplimiento del fin perseguido, sino también aquellas que resultan coadyuvantes y necesarias (aunque secundarias), de manera que no obstante ser auxiliares o de apoyo, resultan imprescindibles para que se puedan cumplir las otras (ya que normalmente integran como auxiliares, la actividad) (Vázquez Vialard, Antonio, Tratado de derecho del trabajo, Ed. Astrea, Bs. As, 1982 t. 2, Cap. IV, pág. 358).

En mi opinión, la exigencia de la norma no solamente comprende la actividad

principal del empresario, sino también las actividades secundarias o accesorias, integradas permanentemente al establecimiento, quedando solamente excluidas las actividades extraordinarias o excepcionales. Este es el sentido de los términos “normal y específico”; normal es lo que sirve de norma o regla y que por su naturaleza se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano, y, específico es lo que caracteriza y distingue una especie de otra. Quedarán excluidos los servicios o las obras que no tengan conexión con la actividad de la empresa comitente.

Según la doctrina científica mayoritaria, las obras o servicios correspondientes a la propia actividad de una empresa son aquellas que pertenecen al ciclo productivo de la misma; y por ciclo productivo ha de entenderse el complejo de operaciones que, en circunstancias normales, son necesarias para alcanzar los objetivos de producción o intercambio de bienes y servicios que constituyen el fin de la empresa. Dentro de estas operaciones necesarias, algunas tienen este carácter por ser inherentes a los objetivos productivos de la empresa, formando parte de las actividades principales de la misma; mientras que otras lo son porque, a pesar de su accesoriedad con ellas hay que contar incluso en circunstancias normales, para el funcionamiento regular de la organización empresarial. No es, por tanto, estrictamente la inherencia el fin de la empresa, sino más ampliamente la indispensabilidad para conseguir lo que debe definir el concepto de “propia actividad”.

Como también ha indicado la doctrina, nos encontramos ante una contratación de este tipo, cuando las obras o servicios objetos de la misma, de no haberse concertado ésta, hubieran debido ser efectuadas directamente por el propio comitente, so pena de malograr o perjudicar simplemente el cumplimiento adecuado de su actividad empresarial.

Desde tal perspectiva de análisis, sin lugar a dudas cabe considerar que la actividad de estiba de las bolsas de azúcar corresponde a la normal y específica de un ingenio –aun cuando no sea su actividad principal -, pues se trata de empresas que fabrican y venden azúcar, para lo cual se requiere necesariamente, de la actividad de estiba, la cual resulta inescindible de todo el proceso de producción y comercialización. Debe tenerse especialmente en cuenta que el CCT N° 12/88 que regula la actividad azucarera, contiene previsiones específicas para las tareas de estiba (art. 17), lo cual demuestra que el legislador considera tal tarea como propia de la actividad azucarera. Al respecto, en casos similares al aquí tratado se juzgó que “... los servicios prestados por el actor a las órdenes de la co-demandada consistían en trabajos normales y habituales cumplidos en los galpones de propiedad de la demandada Compañía Azucarera Concepción S.A., razón por la que corresponde rechazar la excepción de falta de acción que interpone...”; y en su voto, el doctor Antoni precisó que “... las tareas de estibador de bolsas de azúcar, integran la actividad principal y específica propia del ingenio demandado, conforme al convenio colectivo N° 12/1988 (ver entre alguna de sus normas el artículo 17), requisito previsto en artículo 30 de LCT, respecto a solidaridad entre demandado y codemandado.” (Cámara del Trabajo, Sala V, “Alderete Alberto Marcelo vs. Compañía Azucarera Concepción SA y otro s/cobro de pesos”, sentencia del 5.9.07).

Como se advierte la actividad azucarera cuenta, entre sus pasos de producción y comercialización, la imprescindible tarea de estiba de bolsas de azúcar, lo cual puede ocurrir, como en el caso, con la intervención programada de uno o varios empresarios empleadores, en otras palabras, el producto que se vuelca al mercado ha requerido la participación de otros empresarios o empresas que concurren a la realización de tramos parciales de la producción, en definitiva estamos en presencia de un empleador de una actividad coadyuvante o complementaria de la actividad

principal, este carácter de complementario o coadyuvante es lo que se exige cuando se habla de “ ... la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa ...” que expresa el art. 6 de la L.C.T..

Lo descripto luce evidente en el caso en análisis, toda vez que las tareas que cumplían los actores (estiba de bolsas de azúcar) se encontraban integradas permanentemente al establecimiento de la razón social codemandada en esta litis y han coadyuvado y posibilitado, sin duda alguna, el cumplimiento de la actividad normal y específica de aquella que es no solo la producción de azúcar, sino obviamente también su comercialización. Memoro en tal sentido que de los términos del responde de la codemandada emerge el expreso reconocimiento de que su actividad normal y específica es la producción de azúcar que precisamente produce en su complejo fabril, que los actores Antonio Soria, Angel Soria, Mauricio Amaya y Diego Díaz se desempeñaban como cargadores del azúcar por aquella producida. Igualmente no se encuentra controvertido que los actores se desempeñaba bajo dependencia laboral de la demandada Silna S.R.L., que ésta era contratista de Azucarera Juan M. Terán S.A. en la actividad de carga y estiba de bolsas de azúcar, y que para el cumplimiento de esa labor los actores habían sido destinados por su empleador a cumplir tareas en beneficio de la codemandada

Por otra parte el art. 30 de la LCT, con el agregado de la ley 24.013 (conf. Art. 17), consagra una responsabilidad del principal de controlar si se cumplen las obligaciones de trabajo y seguridad social que tienen cesionarios, contratistas, subcontratistas con respecto a cada uno de sus trabajadores, esta facultad de control es obligación del principal con respecto al contratista o subcontratistas, extremo de control que no acredita haber cumplido la codemandada en autos, conforme emerge de las constancias de autos.

Se debe tener presente que las consecuencias previstas por la Ley de Contrato de Trabajo son imperativas y se imponen a la voluntad de las partes, cualquiera haya sido la estipulación entre ellas, en todo lo relativo a los derechos de los trabajadores.

En consecuencia, en base a lo expuesto y siendo la solidaridad impuesta por la ley corresponde condenar solidariamente a la la codemandada Azucarera Juan M. Terán S.A. y a la demandada Silna S.R.L. por las consecuencias derivadas de la extinción de la relación laboral y de las obligaciones emergentes de la seguridad social

Cuarta cuestión

1.- Pretenden los actores la suma de \$ 677.750 (pesos seiscientos setenta y siete mil setecientos cincuenta), con más intereses, gastos y costas en concepto de indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso, integración mes de despido, multa prevista por el art 2 ley 25.323, multas previstas por los arts. 9 y 15 de la ley 24.013 y salarios caídos. En el responde se niega adeudar suma alguna por ningún concepto pretendido.

2.- Para resolver esta cuestión se tendrá en cuenta lo valorado precedentemente, las planillas discriminatorias de rubros y montos insertas en la demanda (fs. 39 vta. /41), en lo que no resulte modificado por el presente fallo, analizando por separado los rubros reclamados conforme a las previsiones contenidas en el art. 265 inc. 6 del CPCyC. supletorio:

a-Indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso e integración mes despido. Atento a las consideraciones vertidas al tratar la segunda cuestión, estimo procedente estos dos rubros por estar prescriptos por los arts. 232, 233 y 245 de la LCT..-

b- Indemnización art. 2 ley nº 25.323. Tengo dicho que en el contexto del recargo del artículo 2º de la ley 25.323, lo sustancial resulta de la verificación del requerimiento

de pago de las indemnizaciones derivadas del despido y de la postura refractaria de la empleadora, que obligó a los trabajadores a iniciar las presentes actuaciones en procura del cobro del crédito debido, todo lo cual emerge claramente comprobable a través de las intimaciones remitidas en fechas 15 y 16 de julio de 2013 (ver fs. 25/28). Así pues, considero que el agravamiento debe ser acogido.

c- Multa art. 9 ley 24.013.No verificando el supuesto de procedencia de dicha indemnización (trabajador registrado con una fecha de ingreso posterior a la real), se rechaza el reclamo de este rubro.

d.- Indemnización art. 15 Ley nº 24.013. Corresponde rechazar esta indemnización por no surgir demostrado que la causa del despido indirecto se hubieres encontrado vinculada con la prevista en el art. 9 (deficientes registración de la fecha de ingreso).

e- Haberes impagos. Se admite el reclamo de salarios caídos, correspondientes a los 18 días en que la demandada se negó a otorgar tareas a los actores conforme probanzas de autos, no obstante encontrarse aquellos a su disposición.

3.- Los conceptos declarados procedentes deberán calcularse tomando como base la remuneración que se denuncia al promover demanda, al igual que la fecha de ingreso que se admite en el responde, con excepción del actor Antonio Omar Soria en cuyo caso habrá que estar a la fecha de ingreso que se denuncia al promover demanda.

4.- Los créditos declarados procedentes en este fallo, devengarán el interés mensual, correspondiente a la tasa activa promedio que publica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos comerciales, el que se calculara hasta el efectivo pago, todo conforme los fundamentos dados por esta Sala en los autos: “Vazquez Herrera Verónica del Valle Vs. AYbar Argañarz Julio César”, sentencia del 17/10/14; Juárez Silvia Lucrecia vs. Rodríguez Lidia Rosario”, “Plaza Cynthia vs. Hernández José Luis y Ferreira María Rita”, entre otros a los que me remito brevitatis causae y que deberán ser considerados como parte integrante de esta Sentencia, y a los fines de mantener incólume su contenido habida cuenta de la situación financiera que se vive en la actualidad y que evidencia un incremento en los índices inflacionarios, surgiendo de los mismos la prueba acabada de la insuficiencia de la tasa pasiva, por lo que tratándose de un crédito alimentario, en el presente caso corresponde adoptar la tasa mencionada desde que los créditos fueron exigibles y hasta su efectivo pago, pretendiendo con ello esta Sala que integro ajustarse a la nueva realidad económica a fin de evitar que el deudor obtenga un enriquecimiento indebido por no cumplir en tiempo con su obligación y que el acreedor resulte perjudicado con la morosidad del primero, teniendo además presente que las tasas bancarias son sólo tasas de referencia.

Planilla de Fallo

Tasa activa Banco NaciónPeríodo 29/06/2013 al 31/03/201796,41 %

Datos

*Ley de Contrato de Trabajo CCT 12/88

Planilla de demanda de fs. 39/41

a) Soria Antonio Omar

Fecha de ingreso:10/05/2008

Fecha de distracto:29/06/2013

Antigüedad computable: 4a 1m 19d = 4 años

Categoría:Estibador

Remuneración s/escala salarial

Básico \$ 5.809,80

No remunerativo \$ 459,00
Gratificación N.R. \$ 900,00
Escalafón \$ 232,39
Total \$ 7.401,19

Cálculo de los rubros que progresan al 31/03/2017

	Fecha	Importe	%	Interés	Total
--	-------	---------	---	---------	-------

1 - Indemnización por antigüedad	29/06/2013	\$ 29.604,77	96,41	\$ 28.541,96	\$ 58.146,72
$\$ 7.401,19 \times 4m = \$ 29.604,77$					
2 - Indemnización sustitutiva de preaviso (1 mes)"		\$ 7.401,19	96,41	\$ 7.135,49	\$ 14.536,68
3 - Integración mes de despido"		\$ 246,71	96,41	\$ 237,85	\$ 484,56
$\$ 7.401,19 / 30d \times 6d = \$ 246,71$					
4 - Indemnización art 2 Ley 25323"		\$ 18.626,33	96,41	\$ 17.957,65	\$ 36.583,98
$(\$ 29.604,77 + \$ 7.401,19 + \$ 246,71) \times 50\% = \$ 18.626,33$					
7 - Haberes impagos"		\$ 5.328,86	96,41	\$ 5.137,55	\$ 10.466,41
$\$ 7.401,19 / 25d \times 18d = \$ 5.328,86$					
TOTALES		\$61.207,86		\$ 59.010,50	\$ 120.218,35

Total de la planilla de Antonio O. Soria al 31/03/2017 \$ 120.218,35

b) Soria Angel Isidro
Fecha de ingreso:01/12/2012
Fecha de distracto:29/06/2013
Antigüedad computable: 1a 6m 29d = 2 años
Categoría:Estibador
Remuneración s/escala salarial
Básico \$ 5.809,80
No remunerativo \$ 459,00
Gratificación N.R. \$ 900,00
Escalafón \$ 58,10
Total \$ 7.226,90

Cálculo de los rubros que progresan al 31/03/2017

	Fecha	Importe	%	Interés	Total
--	-------	---------	---	---------	-------

1 - Indemnización por antigüedad	29/06/2013	\$ 14.453,80	96,41	\$ 13.934,90	\$ 28.388,70
$\$ 7.226,90 \times 2m = \$ 14.453,80$					
2 - Indemnización sustitutiva de preaviso (1 mes)"		\$ 7.226,90	96,41	\$ 6.967,45	\$ 14.194,35
3 - Integración mes de despido"		\$ 240,90	96,41	\$ 232,25	\$ 473,15
$\$ 7.226,90 / 30d \times 6d = \$ 240,90$					
4 - Indemnización art 2 Ley 25323"		\$ 10.960,80	96,41	\$ 10.567,30	\$ 21.528,10
$(\$ 14.453,80 + \$ 7.226,90 + \$ 240,90) \times 50\% = \$ 10.960,80$					
7 - Haberes impagos"		\$ 5.203,37	96,41	\$ 5.016,57	\$ 10.219,93
$\$ 7.226,90 / 25d \times 18d = \$ 5.203,37$					
TOTALES		\$38.085,75		\$ 36.718,47	\$ 74.804,23

Total de la planilla de Angel I. Soria al 31/03/2017 \$ 74.804,23

c) Amaya Mauricio Exequiel

Fecha de ingreso:01/12/2012
Fecha de distracto:29/06/2013
Antigüedad computable: 1a 6m 29d = 2 años
Categoría:Estibador
Remuneración s/escala salarial
Básico \$ 5.809,80
No remunerativo \$ 459,00
Gratificación N.R. \$ 900,00
Escalafón \$ 58,10
Total \$ 7.226,90

Cálculo de los rubros que progresan al 31/03/2017FechaImporte%InterésTotal

- 1 - Indemnización por antigüedad29/06/2013 \$ 14.453,80 96,41 \$ 13.934,90 \$ 28.388,70
\$ 7.226,90 x 2m = \$ 14.453,80
2 - Indemnización sustitutiva de preaviso (1 mes)" \$ 7.226,90 96,41 \$ 6.967,45 \$ 14.194,35
3 - Integración mes de despido" \$ 240,90 96,41 \$ 232,25 \$ 473,15
\$ 7.226,90/30d x 6d = \$ 240,90
4 - Indemnización art 2 Ley 25323" \$ 10.960,80 96,41 \$ 10.567,30 \$ 21.528,10
(\$ 14.453,80 + \$ 7.226,90 + \$ 240,90) x 50% = \$ 10.960,80
7 - Haberes impagos" \$ 5.203,37 96,41 \$ 5.016,57 \$ 10.219,93
\$ 7.226,90/25d x 18d = \$ 5.203,37

TOTALES \$38.085,75 \$ 36.718,47 \$ 74.804,23

Total de la planilla de Mauricio E. Amaya al 31/03/2017 \$ 74.804,23

d) Díaz Diego Rubén
Fecha de ingreso:01/12/2012
Fecha de distracto:29/06/2013
Antigüedad computable: 1a 6m 29d = 2 años
Categoría:Estibador
Remuneración s/escala salarial
Básico \$ 5.809,80
No remunerativo \$ 459,00
Gratificación N.R. \$ 900,00
Escalafón \$ 58,10
Total \$ 7.226,90

Cálculo de los rubros que progresan al 31/03/2017FechaImporte%InterésTotal

- 1 - Indemnización por antigüedad29/06/2013 \$ 14.453,80 96,41 \$ 13.934,90 \$ 28.388,70
\$ 7.226,90 x 2m = \$ 14.453,80
2 - Indemnización sustitutiva de preaviso (1 mes)" \$ 7.226,90 96,41 \$ 6.967,45 \$ 14.194,35
3 - Integración mes de despido" \$ 240,90 96,41 \$ 232,25 \$ 473,15
\$ 7.226,90/30d x 6d = \$ 240,90
4 - Indemnización art 2 Ley 25323" \$ 10.960,80 96,41 \$ 10.567,30 \$ 21.528,10
(\$ 14.453,80 + \$ 7.226,90 + \$ 240,90) x 50% = \$ 10.960,80
7 - Haberes impagos" \$ 5.203,37 96,41 \$ 5.016,57 \$ 10.219,93

\$ 7.226,90/25d x 18d = \$ 5.203,37
TOTALES \$38.085,75 \$ 36.718,47 \$ 74.804,23

Total de la planilla de Diego R. Díaz al 31/03/2017 \$ 74.804,23

Costas

Las costas procesales de esta litis, atento al resultado arribado, se imponen de la siguiente manera: Las demandadas Silna S.R.L. y Azucarera Juan Manuel Terán S. A. cargarán respectivamente con sus propias costas, y en forma solidaria con el 50% de las generadas por la parte actora, quien por su parte deberá cargar con el 50% restante de las suyas propias (art. 49 ley 6.204 y art. 105 del CPCC, supletorio al fuero).

Honorarios

Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el artículo 46 inciso "b" de la ley N° 6.204.

Atento a los resultados arribados en la litis, es de aplicación a la especie el artículo 50 inciso "a" de la citada ley, por lo que se toma como base regulatoria el monto condenado, el que según planilla precedente resulta al 31/03/2017 la suma de \$ 344.631,03 (pesos trescientos treinta y cuatro mil seiscientos treinta y uno con tres centavos).

Por lo expuesto y de conformidad con lo normado por los artículos 15, 39, 40 y concordantes de la ley N° 5.480 y 51 del C.P.T., se regulan los siguientes honorarios:

Letrado Tomás Vicente Alba por su actuación en el doble carácter por los actores en las tres etapas del proceso de conocimiento el 16% + 55% la suma de \$ 85.468,50 (pesos ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho con cincuenta centavos).

Letrado Ricardo Alfredo Veliz por su actuación en el doble carácter por la demandada Silna SRL en las tres etapas del proceso de conocimiento el 10%+55% la suma de \$ 53.417,81 (pesos cincuenta y tres mil cuatrocientos diecisiete con ochenta y un centavos).

Letrado Hugo Mariano Danesi por su actuación en el doble carácter por la codemandada Azucarera Juan M. Terán S.A. en las tres etapas del proceso de conocimiento el 10%+55% la suma de \$ 53.417,81 (pesos cincuenta y tres mil cuatrocientos diecisiete con ochenta y un centavos).

Voto de la Sra. Vocal María Rosario Sosa Almonte

Comparto los fundamentos vertidos por el Sr. Vocal preopinante y voto en igual sentido.

Por ello se:

R E S U E L V E:

I) HACER LUGAR PARCIALMENTE A LA DEMANDA promovida por ANTONIO OMAR SORIA, ANGEL ISIDRO SORIA, MAURICIO EXEQUIEL AMAYA Y DIEGO RUBEN DIAZ, de las condiciones personales que constan en autos, en contra de SILNA S.R.L. y solidariamente en contra de AZUCARERA JUAN MANUEL TERAN S.A.. En consecuencia se condena a las demandadas a pagar solidariamente a los actores, la suma total de \$ 344.631,03 (pesos trescientos treinta y cuatro mil seiscientos treinta y uno con tres centavos), conforme se discrimina en la planilla inserta en el fallo en concepto de: indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso, integración mes de despido, salarios caídos, multa art. 2º ley 25.323. Los importes condenados deberán pagarse dentro de los 10 (diez) días de quedar firme la presente sentencia, bajo apercibimiento de ley, conforme a lo considerado.

Asimismo se absuelve a las demandadas del pago de los siguientes conceptos:
multas arts. 9 y 15 ley 24.013, en mérito a lo considerado.

II) COSTAS, como se consideran.-

III) HONORARIOS, según lo tratado se regulan los siguientes:

Letrado Tomás Vicente Alba por la suma de \$ 85.468,50 (pesos ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho con cincuenta centavos).

Letrado Ricardo Alfredo Veliz la suma de \$ 53.417,81 (pesos cincuenta y tres mil cuatrocientos diecisiete con ochenta y un centavos).

Letrado Hugo Mariano Danesi por la suma de \$ 53.417,81 (pesos cincuenta y tres mil cuatrocientos diecisiete con ochenta y un centavos).

V) PRACTIQUESE y repóngase planilla fiscal en la etapa procesal correspondiente (art. 13 Ley 6.204).-

VI) REGISTRESE y oportunamente archívese.-

H A G A S E S A B E R.-

ENZO RICARDO ESPASA

MARIA R. SOSA ALMONTE

.-

ETI